

Akilah Jenga/Russell Crandall

**El colapso de la revolución bolivariana:
el deterioro del régimen de Chávez y
sus implicaciones para la democracia venezolana
(1998-2002)**

En un artículo editorial aparecido en *The New York Times*, un prominente analista político venezolano señalaba: “Venezuela ya no se aburre más” (Naim 2003). Y, en verdad, lo que fuera alguna vez considerado en los años 60 –aunque, de alguna manera, incorrectamente también– un país relativamente estable y próspero, ha venido experimentando un deterioro continuo y precipitándose a un caos político y económico. La violencia política, antes prácticamente desconocida, resulta hoy día cotidiana. Los delitos con violencia se han multiplicado en todo el territorio nacional, transformando Venezuela en el segundo país más peligroso en el hemisferio occidental, después de Colombia (Robberson 2003a). La inesperada y tremendamente exitosa candidatura de Hugo Chávez en 1998 había sido así, en muchos sentidos, un síntoma de una sociedad política enferma, que se desesperaba por encontrar una figura política que pudiera encarar los problemas sociales que no se habían resuelto en las últimas dos décadas.

Antes, Venezuela había sido considerada como democracia modelo en América Latina, pero la aparente estabilidad gubernamental sólo enmascaraba las estructuras clientelares dependientes del petróleo, que permitió que se desarrollaran instituciones políticas débiles e hizo que los problemas de falta de justicia y de exclusión política quedaran sin solución. Las rentas provenientes del petróleo decrecieron en la década de 1980 y cuando las políticas distributivas se volvieron insostenibles, el sistema empezó a resquebrajarse. La incapacidad para crear riqueza económica y la inclusión política que la gente anhelaba, condujo al quiebre de los partidos políticos tradicionales, y los venezolanos comenzaron a buscar un líder que les trajera prosperidad (Coronil 1997: 1-18, 367-394; Weyland 2002; Naim 1993). Sin embargo, des-

graciadamente, a casi 4 años de presidencia de Chávez y de “revolución bolivariana” (fase que estamos revisando en este artículo) y la situación ha empeorado aún más para la gran mayoría de los venezolanos.

Desde que Chávez ascendiera al poder, más de un millón de venezolanos han pasado de la “pobreza” a la “pobreza extrema”. Aproximadamente el 68% de los venezolanos vive hoy en pobreza, un 10% más que en 1998 (Forero 2003). La economía venezolana se contrajo en 2003 y la inflación permanece en niveles elevados. (Robberson 2003). En su historia política reciente, después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, la sociedad política venezolana no había vivido nunca una polarización tan pronunciada. (Lugo Galicia 2003). Si Chávez contaba con el apoyo de cerca del 80% de la población al inicio de su mandato (Weyland 2001: 82), actualmente esta base ha caído al 30% (Robles 2003). El apoyo proviene fundamentalmente de los sectores marginales que le siguen siendo leales, a pesar de su política generadora de pobreza, pues creen que representa su única esperanza de prosperidad en el futuro (Naim 2002).

La confrontación política entre el presidente populista Hugo Chávez y sus opositores continúa. Habiendo sobrevivido un intento de golpe de Estado en abril del año 2002, Chávez permanece firmemente decidido a conservar el poder. Aquel fracaso hace improbable un golpe de Estado tradicional contra Chávez. En consecuencia, la frustrada pero resistente oposición se resignó a usar medios electorales para lograr su remoción. La huelga general declarada en noviembre de 2002 y continuada hasta febrero de 2003 paralizó temporalmente la economía, pero no logró su objetivo de forzar la renuncia de Chávez. La oposición reunió suficientes firmas para solicitar un referendo revocatorio contra Chávez y cree que puede removerlo e incluso ganarle en elecciones democráticas.

El impacto económico de la crisis política aumenta la probabilidad de este escenario, más que la oposición como tal. Si la situación económica de Venezuela sigue empeorando, es posible que el descontento hacia Chávez aumente, en particular, al momento que su capacidad para implementar políticas sociales redistributivas se debilite. Por otra parte, los venezolanos que apoyan a Chávez, lo hacen en forma extremadamente leal, lo cual no es el caso de la oposición, como el fallido intento de golpe de Estado demostró claramente. Los partidarios de

Chávez se mantienen unidos por la fuerza que emana de sus promesas, mientras la oposición es una coalición débil, sustentada sólo en el desencanto con Chávez. Si la oposición fracasa en sus proyectos electorales, la estabilización política del país se alejará aún más.

En este artículo ofrecemos una crónica de los acontecimientos del año 2002.

El poder de Hugo Chávez empezó a debilitarse a principios de 2002 cuando, el 5 de enero, la oposición casi logró destituir al presidente de la Asamblea Nacional y aliado de Chávez, Willian Lara. El rechazo visceral de Chávez es el único cemento aglutinador de los distintos sectores de la oposición, a la que se unieron algunos diputados del movimiento chavesta. La votación demostró que Chávez no podía contar con una mayoría automática en el poder legislativo que había apoyado su agenda política y económica y, más importante aún, que le había permitido sostener, que su gestión tenía un respaldo democrático (Crandall 2003: 82-83).

La crisis económica estalló a principios de abril de 2002, cuando los trabajadores de la corporación petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA) se declararon en huelga para protestar por los intentos de Chávez de instalar aliados políticos en posiciones administrativas claves de aquélla. PDVSA está integrada por una nómina de aproximadamente 40 mil empleados y genera 50 billones de dólares al año en ingresos (Fleisher 2003). Del petróleo proviene la mitad del ingreso fiscal de Venezuela y cerca del 80% de sus ingresos por exportaciones (Robles 2003a). PDVSA era considerada como empresa bien gerenciada y mediterránea que rechazaba los intentos de politización de Chávez. También existían posiciones críticas frente al suministro de 50 mil barriles de petróleo diarios a Cuba, en condiciones preferenciales (Easton 2003).

La huelga del petróleo dio más fuerza a una huelga general organizada por la principal central sindical (Confederación de Trabajadores de Venezuela) y apoyada por Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela), la más importante asociación empresarial. Cuando la protesta alcanzó su auge, estos sectores insistían en que Chávez debía renunciar. Según estimaciones, la marcha del 10 de abril de 2002 contó con la participación de 250 a 350 mil personas. Aunque los detalles acerca de los culpables no han salido a la luz, 17 personas murieron a consecuencia

de disparos contra los manifestantes y las noticias de la masacre profundizaron el sentimiento anti-Chávez en todo el país (Ellner/Rosen 2002: 11).

La secuencia de eventos se aceleró una vez conocidas las noticias de que manifestantes pacíficos habían sido asesinados por tropas leales a Chávez. El comandante del Ejército, general Efraín Vásquez Velasco, emitió un ultimátum para exigir la renuncia de Chávez. El presidente se negó, pero señaló que “abandonaría sus funciones” si lo pedía la Asamblea Nacional, donde mantenía una precaria mayoría. Chávez nunca renunció oficialmente y fue recluido en un recinto militar. Según informaciones, se estaba preparando su salida al exilio en Cuba. El comandante de las Fuerzas Armadas, general Lucas Rincón Romero, anunció que Chávez había renunciado y, 90 minutos más tarde, Pedro Carmona Estanga, el presidente de Fedecámaras, fue nombrado jefe de un gobierno de transición. Carmona disolvió la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, dejó sin efecto una serie de reformas sociales y declaró abolida la Constitución de Chávez, que había sido ratificada por referendo a fines de 1999 (Crandall 2003: 83-84). Además ordenó allanamientos contra partidarios de Chávez, y se desató una ola de persecuciones que produjeron la muerte de alrededor de veinte o treinta personas (Ellner/Rosen 2002: 11).

La coalición de amplia base que había salido a la calle pidiendo la salida de Chávez se dispersó rápidamente. Sectores importantes de los sindicatos, partidos de oposición y las Fuerzas Armadas, no estuvieron de acuerdo con la decisión de Carmona en disolver los poderes constituidos. Más aún, el gabinete designado para la transición, no incluía líderes de los trabajadores y esto representó, para amplios sectores de la oposición, el triunfo de la elite oligárquica. Carmona cometió otro error nombrando al Almirante Héctor Ramírez Pérez como ministro de Defensa, por encima del general Vásquez. El Ejército es la fuerza más importante y Vásquez no estaba dispuesto a aceptar un ministro proveniente de la Marina. En consecuencia, retiró su apoyo al golpe, lo que marcó el fin de la efímera presidencia de Carmona, quien renunció en la noche del 13 de abril de 2002, 36 horas después de asumir el poder. Chávez fue traído de vuelta desde su sitio de detención en la isla caribeña de la Orchilla (Crandall 2003: 84).

Con sus decretos inconsultos e impopulares, Carmona perdió rápidamente el respaldo de quienes lo habían instalado en el poder. Subes-

timó también la fuerza de los partidarios de Chávez, organizados en los Círculos Bolivarianos, células paramilitares que habían sido creadas con asistencia de Cuba el año anterior. Se cree que aproximadamente 500 mil ciudadanos forman parte de 30 mil Círculos Bolivarianos. Estas células, bien organizadas, dieron un apoyo logístico crucial a Chávez en las áreas marginales de Caracas y fueron el instrumento para hacer presión de calle contra el gobierno de Carmona. Cuando Chávez retornó al palacio presidencial a las 3 de la tarde del 14 de abril del 2002, tropas leales y miembros de los Círculos Bolivarianos se encontraban presentes para recibirlo. Después del fallido golpe de Estado, Chávez adoptó un discurso más moderado. Sorprendido por el nivel de oposición en su contra, Chávez se dispuso a gobernar como si fuera presidente sin mayoría parlamentaria; una política distinta a su estilo anterior. Ante todo había que depurar la Fuerza Armada Nacional (FAN). Había quedado demostrado que no tenía el respaldo sólido de la FAN, razón por la cual decidió cambiar el alto mando.

Poco después del fallido golpe, Chávez también desistió de su plan de control político de PDVSA. En una medida diseñada para aplacar la corporación petrolera, Chávez nombró presidente a Ali Rodríguez, secretario general de la OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Una de las primeras medidas de Rodríguez fue nombrar un comité de directores que incluía ejecutivos opuestos a Chávez y que habían permanecido en la empresa a pesar del intento de Chávez de hacerse con el control político de la empresa. Hacia verano de 2002, la reconciliación parecía al menos posible.

Era evidente que el apoyo popular de Chávez había mermado, e incluso la amplia mayoría parlamentaria –casi dos tercios– estaba quedando reducida a una precaria mayoría simple. Sin embargo, mientras muchos observadores creían que Chávez se vería obligado a negociar más seriamente y llegar a compromisos con la oposición, los hechos fueron diferentes. Hacia otoño de 2002, el presidente Chávez ya había dejado de lado su actitud conciliadora hacia la oposición (S.N. 2002).

A finales de octubre de 2002, catorce generales y almirantes, muchos de los cuales habían participado en el intento de golpe de abril, se declararon en rebeldía, junto con otros 140 oficiales de la FAN, en La Plaza Altamira de Caracas. Si bien en aquel momento Chávez contaba

con un amplio apoyo de la Fuerza Armada, la protesta indicó que había mucha tensión en los mandos militares.

Las relaciones entre el gobierno y la oposición sufrieron un giro negativo el 16 de noviembre de 2002, cuando Chávez ordenó la intervención de la Policía Metropolitana, una fuerza de 8.000 integrantes. La medida se tomó en respuesta a una huelga de un sector de esa fuerza policial que ya había durado varias semanas. Después de la acción militar, incidentes y protestas callejeras dirigidas por figuras de la oposición, como Peña, se distribuyeron por toda la ciudad de Caracas, incluyendo la explosión de una bomba en el centro, que causó la muerte de tres personas (Webb-Vidal 2002).

La creciente tensión culminó en la huelga nacional indefinida del 1º de diciembre de 2002 convocada por la oposición. El grupo más representado entre los huelguistas era el de los trabajadores del petróleo, que con su acción interrumpieron la producción de 3 millones de barriles de petróleo por día, causando una pérdida de ingresos de 50 millones de dólares diarios al gobierno.

Chávez, demostrando su notable capacidad de supervivencia, respondió con iniciativas destinadas a recuperar la producción de petróleo y la capacidad de exportación. Hacia fines de diciembre de 2002 acrecentó su control de PDVSA, despidiendo cerca de 100 ejecutivos acusados de apoyar el paro. La totalidad de los despidos alcanzó finalmente a la mitad de la nómina fija de la compañía. A comienzos de febrero de 2003, la huelga había fracasado. Desde diciembre de 2002, se perdieron ingresos de alrededor de 4 billones de dólares. Sin embargo, hacia agosto de 2003, la producción supuestamente retornó a los niveles que había tenido antes del paro.

El 17 de diciembre de 2002, el Consejo Permanente de la OEA (Organización de Estados Americanos) aprobó una resolución que reclamaba una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral de la crisis política. El gobierno norteamericano respaldó la resolución, lo que fue visto por muchos como un cambio del planteamiento anterior de Washington en apoyo a elecciones anticipadas en Venezuela. En enero de 2003, la comunidad internacional formó un Grupo de “Amigos de Venezuela” –que incluye a los Estados Unidos, Brasil, México, España, Portugal y Chile– y cuyo propósito ha sido promover una solución pacífica a la crisis. Chávez aceptó la iniciativa, pero exi-

gió que otros países debían sumarse a ella, entre otros Cuba (Castañeda 2003).

Después de reunirse con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 16 de enero de 2003, Chávez dijo a un grupo de periodistas: “Yo no tengo la más ligera duda de nuestro triunfo. Estamos ganando esta batalla y la vamos a ganar” (Álvarez 2003; S.N. 2003). También aceptó la realización de un referendo sobre su presidencia si se obtenía el número requerido de firmas para solicitarlo; esto es, la oposición debe reunir 2,4 millones de firmas, correspondientes al 20% del electorado (“Venezuela: Chávez 2003). En mayo de 2003, previa mediación de la OEA, el Centro Carter y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), las partes firmaron un acuerdo relativo a la solución pacífica, constitucional y electoral de la crisis (Forero 2003a).

El 20 de agosto de 2003, los grupos de oposición llevaron las 2 millones 400 mil firmas requeridas al Consejo Nacional Electoral (CNE) (Forero 2003b). Sin embargo, dichas firmas fueron rechazadas con el argumento de que habían sido recogidas con anterioridad a la fecha en que Chávez había cumplido la mitad de su período electoral. A pesar del revés, la oposición decidió no claudicar en su empeño; superando todos los obstáculos, entre ellos la designación de un nuevo CNE mayoritariamente prochavecista, logró reunir las firmas y la correspondiente convocatoria del referendo para el mes de agosto de 2004.

El futuro de Venezuela se perfila en varios escenarios posibles que implican una serie de desafíos. Aunque encuestas recientes indican que es improbable que Chávez gane el referendo revocatorio, no se puede descartar esa posibilidad.

Bibliografía

- Álvarez, Irma (2003): “Está Prohibido Equivocarse”. En: *El Nacional*, 8/28/03.
- Castañeda, Jorge G. (2003): “The Forgotten Relationship”. En: *Foreign Affairs*, vol. 82, no. 3, p. 67.
- Coronil, Fernando (1997): *The Magical State: Nature, Money, and Modernity in Venezuela*. Chicago: University of Chicago Press.

- Crandall, Russell (2003): "Continuing Insecurity in the Northern Andes". En: *Strategic Survey 2002/3: An Evaluation and Forecast of World Affairs*. Oxford: Oxford University Press for The International Institute for Strategic Studies, pp. 76-89.
- Easton, Adam (2003): "Venezuela Leader Rules Out Early Poll". En: *BBC World News*, 9/8/03.
- Ellner, Steve/Rosen, Fred (2002): "The Remarkable Rise and Fall of Hugo Chávez". En: *NACLA*, vol. 36, no. 1, pp. 9-16.
- Fleisher, Lowell R. (2003): "Economic and Political Troubles Plague Venezuela". En: *American Diplomacy*, vol. 8, Nn. 1. <https://www.ciaonet.org/olj/ad/ad_v8_1/fil01.html> (3/8/04).
- Forero, Juan (2003): "As Venezuela Slides, the Poor Stand by Their Man". En: *The New York Times*, 4/30/03.
- (2003a): "Chávez and Foes Agree to a Referendum". En: *The New York Times*, 5/24/03.
- (2003b): "Venezuela Council Rejects Petition to Recall Chávez". En: *The New York Times*, 9/13/03.
- Lugo Galicia, Hernán (2003): "El MVR Peleará por Anular la Pregunta si Validan las Rúbricas". En: *El Nacional*, 9/10/03.
- Naim, Moisés (1993): *Paper Tigers and Minotaurs: The Politics of Venezuela's Economic Reforms*. Washington: The Carnegie Endowment for International Peace.
- (2002): "Poor but Fervently Loyal". En: *Economist*, 8/31/02.
- (2003): "Hugo Chávez and the Limits of Democracy". En: *The New York Times*, 3/5/03.
- Robberson, Tod (2003): "Venezuela Oil Crisis Spills Into U.S.". En: *The Dallas Morning News*, 3/9/03.
- (2003a): "Venezuelan Crime Explodes, Rated Hemisphere's Second Most Dangerous". En: *The Dallas Morning News*, 3/13/03.
- Robles, Frances (2003): "Recall Vote in Venezuela Stalls". En: *The Miami Herald*, 8/3/03.
- (2003a): "Venezuela Could Ease Exchange Controls After Foreign Reserves Surpass US\$ 18 Billion". En: *Associated Press Worldstream*, 5/14/03.
- S.N. [Sin Nombre] (2002): "A Tragic and Dangerous Stalemate". En: *Economist*, vol. 365, no. 8294, p. 33.
- (2003): "Minuto a Minuto". En: *El Nacional*, 8/31/03.
- Webb-Vidal, Andy (2002): "Troops Seize Police HQ for Chávez". En: *Financial Times*, 11/18/02. London.
- Weyland, Kurt (2001): "Will Chávez Lose His Luster?". En: *Foreign Affairs*, vol. 80, no. 6, pp. 73-87.
- (2002): *The Politics of Market Reform in Fragile Democracies: Argentina, Brazil, Peru, and Venezuela*. Princeton: Princeton University Press.